

Una esperanza naciente

Los levantamientos en los países árabes quizás hayan puesto en marcha una transformación a largo plazo en la región

Marwan Muasher

FOTO: CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN CARNEGIE PARA LA PAZ INTERNACIONAL



LOS LEVANTAMIENTOS ANTIGUBERNAMENTALES que comenzaron en Túnez a finales de 2010 y se propagaron rápidamente a la mayor parte del mundo árabe no se tradujeron en la instauración de estados democráticos como muchos habían esperado. Casi todas las naciones han vuelto a la mala gobernanza que imperaba hace casi siete años y que alimentó la revuelta en toda la región.

En Libia, Siria y Yemen, las protestas callejeras no fueron una herramienta eficaz para la construcción del Estado, y los países siguen padeciendo luchas internas y guerras civiles. En Egipto, las fuerzas contrarrevolucionarias dominan en una situación de estabilidad temporaria y a menudo engañosa que no ha logrado abordar las difíciles condiciones socioeconómicas del ciudadano común. Los Estados del Golfo resistieron inicialmente la ola de cambios utilizando recursos económicos (ahora cada vez más escasos), sin otorgar una voz significativa a los ciudadanos que estaban ansiosos por participar en el proceso de toma de decisiones de sus países.

En Jordania y Marruecos, los gobiernos silenciaron a sus ciudadanos mediante una combinación

de reformas ad hoc que no pretenden afectar la estructura de poder y avivar el temor público de que las protestas pudieran llevar a la población a la misma situación de sus países vecinos (Egipto y Libia para los marroquíes, y Egipto y Siria para los jordanos). Han vuelto a lo de siempre, sin encarar de manera drástica los acuciantes desafíos que enfrentan sus países.

Solo en Túnez las protestas sí activaron una nueva fase de construcción del Estado, mediante un proceso consensuado, liderado por la sociedad, para establecer un nuevo contrato social.

Una transformación largamente demorada

Sin embargo, aunque la denominada Primavera Árabe no logró cambiar rápidamente el statu quo, quizás haya puesto en marcha, como en Túnez, una transformación largamente retrasada. Concretar ese proceso llevará décadas, pero si se lo gestiona correctamente se pueden instituir sociedades más abiertas y meritocráticas en toda la región.

Ello se debe a que las demandas de una mejor gobernanza no han decaído. Aun cuando los antiguos regímenes sigan dominando, los contratos sociales que por generaciones han regido en la mayor parte del mundo árabe se están quebrando. Esos contratos, generalmente impuestos por los gobernantes y no como resultado de un acuerdo consensuado entre diversos grupos sociales, se basaban en los dos pilares principales del denominado sistema rentista. El primer pilar estipulaba que los gobiernos son responsables principalmente de proveer servicios adecuados de salud y educación, empleos y subsidios para acceder a los productos esenciales, una generosidad posibilitada por los ingresos petroleros. A cambio, los ciudadanos aceptaban el segundo pilar: no tener una voz importante en la conducción de sus asuntos.

Esos contratos sociales funcionaron de una forma u otra en tanto la primera cláusula del pacto fuera debidamente respetada. Pero cuando los gobiernos se sobredimensionaron y ya no pudieron brindar servicios adecuados y privilegios —aunque seguían

negándose a otorgar a sus ciudadanos una representación significativa— los contratos se desmoronaron. Algunos gobiernos trataron de abordar solo los problemas económicos, impulsando reformas económicas necesarias, pero reprimiendo las reformas políticas y frustrando el desarrollo de un sistema de frenos y contrapesos. Como era de esperar, aumentó vertiginosamente la corrupción sin control. La situación se tornó insoportable para muchas personas, que salieron entonces a las calles.

La caída de los precios del petróleo acelerará la desaparición del sistema rentista, que ha prolongado la ineficiencia económica durante décadas. Los países productores de petróleo ya no pueden actuar como estados benefactores para sus ciudadanos, mientras que los países importadores no pueden ya depender de las subvenciones otorgadas por los primeros, ni de las remesas de sus ciudadanos que trabajan en esos otros países, para financiar sus sistemas clientelares. Ambos grupos de países desestiman una transición hacia sistemas basados en el mérito y la transparencia gubernamental a su propio riesgo.

Suena evidente que tal transición es necesaria para sacar al mundo árabe de su atolladero, pero es más fácil hablar de ella que lograrla. Los sistemas rentistas imperantes desde hace décadas han instaurado estratos políticos con intereses creados, poco preocupados por adoptar sistemas basados en el mérito y la rendición de cuentas que podrían arrebatarles sus cargos y privilegios. También crearon burocracias ineficientes que no quieren o no pueden convertirse en sistemas económicos más productivos. Otro aspecto problemático es cómo empoderar a sectores enteros de la sociedad —dependientes desde hace mucho tiempo del Estado para obtener empleos, servicios y subsidios— para que puedan bastarse por sí mismos y competir por trabajos en el sector privado. Se requiere una voluntad política sostenida para hacer una transición política y económica gradual hacia sociedades estables y prósperas, y tal voluntad parece estar hoy masivamente ausente en la región.

El modelo de Túnez

Túnez, sin embargo, ha demostrado que el cambio no es imposible. Pero sus circunstancias singulares —una extensa clase media, sindicatos independientes, las victorias obtenidas en materia de derechos de la mujer y una oposición islámica moderada— probablemente impliquen que las posibilidades de replicar un experimento similar en otros países árabes en un futuro cercano sean escasas. Las medidas adoptadas por Túnez podrían servir como guía para una sociedad árabe que busque establecer un nuevo curso conducente a la estabilidad y la seguridad. Los tunecinos han mostrado que la primera tarea es acordar un nuevo contrato social que defina y garantice los

derechos de todos los componentes de la sociedad, seculares y religiosos. Túnez logró un acuerdo mediante arduas negociaciones y concesiones entre esos diferentes grupos, en lugar de aplicar una solución insostenible impuesta por el gobierno, por la mayoría o por una potencia externa, como Estados Unidos en el caso de Iraq.

La nueva constitución tunecina defiende los derechos de todos los componentes de la sociedad, garantiza que ningún grupo pueda imponer su estilo de vida a los demás, y adopta con firmeza el principio de traspaso del poder por medios pacíficos. Gracias a décadas de lucha de las

Se requiere una voluntad política sostenida para hacer una transición política y económica gradual hacia sociedades estables y prósperas.

mujeres por la igualdad de derechos, la nueva constitución les otorga igualdad ante la ley en mucho mayor medida que cualquier otra constitución árabe, y allana el camino para una ciudadanía igualitaria, algo crucial para el sano desarrollo de cualquier sociedad. Igualmente importante es que Túnez haya demostrado que el Islam y la democracia no son contradictorios y que los elementos seculares y religiosos pueden concordar en que el marco rector de los temas políticos es un documento de inspiración humana, no divina.

Túnez está aún lejos de lograr estabilidad o prosperidad, dados sus graves problemas políticos, económicos y de seguridad. Pero los está encarando dentro de un marco sólido: la nueva constitución que guía sus pasos. En ello radica la importancia del modelo tunecino, y por eso merece recibir respaldo financiero y técnico de la comunidad internacional. El éxito del modelo tunecino puede servir como un faro para el resto de la región en el caso de que esta procure cambiar su trayectoria actual, pero su fracaso también tendría repercusiones mucho más allá de sus fronteras.

La transición desde un modelo rentista a otro basado en el mérito y la productividad debe ser gradual. Los motores del crecimiento deben pasar lentamente al sector privado, transformándolo en el principal proveedor de empleo, mientras los gobiernos brindan educación y servicios de salud y regulan la actividad económica. Es preciso dar a todos los ciudadanos herramientas que les permitan competir, tales como un sistema educativo más actualizado, inclusivo y abierto.

Debe descartarse la noción de que la reforma económica puede tener éxito sin un proceso que simultáneamente

Tunecinos ondean banderas en la Avenida Habib Bourguiba en su capital, Túnez, durante una marcha para conmemorar el sexto aniversario de la revolución de 2011.



construya las instituciones políticas y cree un sistema de frenos y contrapesos. El enfoque basado solo en lo económico, vigente durante décadas, ha fracasado estrepitosamente en el mundo árabe. Los nuevos contratos sociales deben lograr el equilibrio correcto entre las preocupaciones económicas y políticas para paliar el impacto de las necesarias y dolorosas reformas económicas. Es esencial otorgar a los ciudadanos una participación significativa e incluirlos en el proceso de toma de decisiones.

El fin de la era del petróleo

Este difícil proceso es prácticamente un imperativo, dado que la era del petróleo ha llegado a su fin en el mundo árabe. Y es aquí donde el papel de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, se torna complejo. Sus mandatos tradicionales casi les prohíben abordar cuestiones

políticas, pero un enfoque centrado solo en lentas y graduales reformas económicas ha arrojado pocos resultados positivos. Para seguir siendo pertinentes en esta era de transformación del mundo árabe, las instituciones financieras internacionales deben hallar nuevas formas de ayudar a los países a avanzar con éxito hacia el desarrollo. El FMI y el Banco Mundial, por ejemplo, han comenzado en los últimos años a trabajar con la sociedad civil, estudiar formas de combatir la corrupción y promover mejores sistemas educativos y sanitarios. Tendrán que redoblar la apuesta en ese tipo de esfuerzos al emprender programas de reforma económica con las naciones árabes.

Los levantamientos han mostrado que la región carece de un concepto moderno de ciudadanía. El antiguo paradigma que considera a los ciudadanos como sujetos incapaces de tener una voz significativa en la gestión de sus propios asuntos debe cambiar.

FOTO: GETTY IMAGES / APP / FETHI BELHAD



El concepto de igualdad ciudadana para todos, con independencia del género, orientación política, religión u origen étnico, debe estar consagrado en cualquier nuevo contrato social. Solo empoderando a todos los ciudadanos con la creencia de que son iguales ante la ley puede una sociedad dotarlos de su máximo potencial. Muchos países árabes que han promovido formas estrechas de nacionalismo haciendo hincapié en la prominencia de ciertos grupos deben concentrarse en cambio en construir fuertes identidades nacionales que superen a cualquier otra afiliación. La diversidad cultural, étnica y religiosa del mundo árabe debe considerarse como una fortaleza antes que una debilidad para que las sociedades evolucionen de manera saludable.

Religiosos o seculares

En el mundo árabe los levantamientos han reavivado el debate respecto a si los nuevos sistemas de gobierno

deben ser religiosos o seculares. El surgimiento de grupos radicalizados como el Estado Islámico (o ISIS) y otros actores no estatales ha hecho que grupos islámicos más moderados como los Hermanos Musulmanes declaren su fuerte preferencia por un Estado “civil”, para evitar el uso del término “secular”, que la mayoría

La diversidad cultural, étnica y religiosa del mundo árabe debe considerarse como una fortaleza antes que una debilidad.

de las personas de la región asocian con el ateísmo y la separación absoluta de la religión y la política. Si bien las fuerzas tanto seculares como religiosas declaran su apoyo a un Estado civil, el diablo está en los detalles. Excepto en Túnez, el debate sigue centrándose en un enfoque en el cual el ganador se lleva todo, en lugar de buscar un pluralismo que asegure a todos los grupos el derecho de funcionar de manera pacífica e impida a un grupo imponer su estilo de vida a los demás.

Para que la región aliente alguna esperanza de lograr sociedades pluralistas, ningún aspecto exige un esfuerzo más inmediato y sostenido que la reforma educativa. Más allá de los indicadores cuantitativos, como las computadoras disponibles en el aula y la construcción de escuelas, es preciso analizar los valores y habilidades que se enseñan y los métodos empleados para hacerlo. Deben adoptarse nuevos paradigmas para enseñar y estimular el pensamiento crítico, permitir el cuestionamiento de lo que se enseña y alentar a los estudiantes a pensar de manera lógica e inquisitiva. Las escuelas deben enseñar el valor de la diversidad y transmitir claramente que la verdad no es absoluta, que la tolerancia de visiones diferentes es crucial y que la apreciación de distintas opiniones es la clave para la innovación y la renovación. Sobra decir que estos valores son una condición indispensable para el pluralismo, la ciudadanía igualitaria y los estados civiles.

Los levantamientos removieron una tapa de hierro que mantuvo artificialmente estables a las sociedades árabes mientras escondía los reales desafíos que enfrentaba la región. La única forma de alcanzar la estabilidad y prosperidad natural es recorriendo un largo y arduo proceso de construcción institucional, reparto del poder y crecimiento más inclusivo. **FD**

MARWAN MUASHER es vicepresidente de estudios de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.